



Los bloqueos en las carreteras se han convertido en herramientas de la comunidad para reclamar una mayor inversión, para la solución a los problemas que afronta la región.

Drama y pobreza en medio de las riquezas

Dos billones de pesos en regalías, pero no hay agua, alcantarillado, y sigue la desnutrición

trabajos periodísticos Mala calidad y deficiencias en el servicio



Los servicios públicos son prestados de manera artesanal, poniendo en peligro a los usuarios.



Problemas por falta de agua, energía eléctrica y salud generan las protestas masivas.

Mientras la población padece, cada cuatro años se inicia la maratónica carrera del poder, en donde se promete todo, pero nada se cumple.

Esta millonaria cantidad de recursos no se ve reflejada en los mejoramientos de la calidad de vida. Los hospitales solo reciben cambios estéticos en sus fachadas, e incluso se han construido nuevos centros asistenciales como en Maicao, pero sin que se mejore su tecnología para atender a los usuarios. Las unidades de cuidados intensivos son manejadas por empresas privadas, lo que no permite que la población pobre sea atendida con facilidad.

Pese a todas las auditorías visibles que continuamente se hacen y se promueven, hasta el momento, no existe ninguna persona, entidad o funcionario público sancionado por malversación o desviación de las regalías en este Departamento.

Las entidades públicas, como Gobernación y alcaldías, han realizado reestructuraciones para ajustarse a los niveles de gastos autorizados por la ley, sin embargo, la plata que deja el carbón y el gas se volatiliza, en contratos para ejecutar obras, cuyos efectos no siente ni goza la comunidad.



Parte II

Las coberturas mínimas, que deben ser alcanzadas por municipios y departamentos con recursos de regalías, no se cumplen. Según la Ley 1151 de 2007, artículo 120, la mortalidad infantil máxima debe ser del 1.6%; las coberturas mínimas para salud se establecen en el 100%; educación básica, 100%; agua potable, 93.5%, y alcantarillado, 89.4%.

Las amas de casa se ven obligadas a comprar botellones de agua tratada, pese a que su calidad se encuentra en duda, lo que aumenta el presupuesto de la canasta familiar. Mientras que un ciudadano intenta cuidar su salud consumiendo agua tratada, cada vez que se baña, lava la loza o simplemente se afeita, lo hace con agua impotable; esto aumenta la posibilidad de ser contaminado por cientos de bacterias detectadas, pero no controladas.

La cobertura de agua en ciudades como Riohacha y Maicao no supera el 51%, pese a que entre los años 2008 al 2011, se han destinado más de 100 mil millones de pesos para cubrir con el mejoramiento de la cobertura de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Mientras las coberturas del régimen subsidiado aumentaron en un porcentaje de 92.5% y para la educación, en su parte de cobertura, se manejan recursos para la gratuidad en la básica primaria y estudios superiores, hasta el momento,

no se han podido superar los niveles para mejorar el saneamiento básico, lo cual viene afectando notoriamente la salud de un alto porcentaje de los habitantes de la Península.

El efecto de las regalías no se siente en sus 681 mil 575 habitantes. Entre el Norte y el Sur existen grandes diferencias de carácter cultural y de desarrollo. El extremo norte del Departamento registra los mayores índices de pobreza y, por ende,

de necesidades básicas insatisfechas. Pueblos enteros como Nazareth, Puerto Estrella, El Cabo de la Vela, Buenos Aires, El Pájaro, Mayapo, carecen totalmente de sus servicios públicos. En Nazareth funcionan unas plantas para energía eléctrica y en estos momentos se termina un proyecto de energía eólica. Las mismas poblaciones de Uribia y Manauare, cabeceras municipales, registran problemas por la mala calidad de

vida de sus ciudadanos.

De acuerdo a análisis estadísticos, el departamento de La Guajira recibió entre el 2002 y el 2008, unos dos billones de pesos en regalías directas, por concepto de explotación de recursos, como el carbón, el gas y la sal. La sola Gobernación recibió el 54%, los municipios de Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao y Uribia, recibieron el 34% y los restantes se quedaron con el 12%.